

Dónde se nos perdió el azúcar?

Historia De Nunca

Acabar

Azúcar más cara ¿De la carestía a la represión?

Miguel Angel Granados Chapa

Entre 1958 y 1970 el precio del azúcar no se modificó. En la restructuración de Echeverría, en diciembre de 1970, se encontró que la inamovilidad del precio contaba entre las causas de la depresión de la industria, y se autorizó un alza de casi 50 por ciento, de tal modo que el kilogramo de refinada pasó de costar 1.45 a 2.15. En diciembre de 1976, un nuevo incremento duplicó el precio y lo colocó en 4.30. Tres años más tarde, el 18 de enero de 1980, también fue de casi ciento por ciento el alza, y el precio llegó a ocho pesos. El viernes 13 de junio, menos de seis meses después, se anuncia que el azúcar cuesta a partir de ayer 13.50. La verdadera magnitud de este último incremento, sin embargo, tiene que medirse en el nuevo precio del azúcar morena: hoy cuesta más del doble que anteayer, pues saltó de seis a 12.50 pesos.

El nuevo precio del dulce suscita una doble, contradictoria impresión, antes de insertar el hecho en su contexto político y económico. A la inicial reacción de molestia y desconcierto, pues el que el azúcar cueste más supone un notable recortamiento de la capacidad adquisitiva del salario, se superpone la consideración mucho más racional de que la fijación de un nuevo precio era inevitable. El acortamiento de los plazos en que fue necesario incrementar el precio es inversamente proporcional a la gravedad de la situación de la industria azucarera. El monto de subsidio era ya insostenible para las cajas públicas, por lo que es irrefutable el argumento de que sanear esa actividad exige precios mucho más aproximados a los costos. Por cierto que no es dato desdeñable el que en la comunicación en que se establece el nuevo precio se haga ascender el volumen del subsidio a 21 mil millones de pesos al año, mientras que en el documento básico del Sistema Alimentario Mexicano se dice que es de 14 mil millones. Será preciso saber si el diferendo obedece a que se midieron dos hechos diversos o si andamos tan mal que nos brota una diferencia de 7 mil millones de pesos proveniente del dinero público como si tal cosa.

Admitir la terrible necesidad de aumentar el precio del azúcar para evitar la quiebra de la industria o una creciente carga financiera para el Estado, sin embargo, no es fácil. Al mismo tiempo que se anuncia esta medida, se avisa a los maestros que tendrán un aumento de emergencia de 22 por ciento en sus salarios cuando en el sector paraestatal está vigente un tope de 20 por ciento, y en las contrataciones colectivas generales no se consiguió, normalmente, ningún aumento mayor a 23 por ciento. Aunque el azúcar sea sólo uno de los componentes de la dieta nacional, para muchos mexicanos es

su principal fuente de calorías, en un país en que, según datos del SAM, 90 por ciento de la *población objetivo preferente* padece subconsumo calórico, y de ese porcentaje, que representa 21 millones de personas, nueve y medio lo sufren gravemente, con deficiencias que van del 25 al 40 por ciento respecto del mínimo normativo, que es de 2 mil 750 calorías diarias por persona.

Dos consecuencias inquietantes, para decir lo menos, pueden desprenderse de un hecho como el nuevo precio del azúcar y la restructuración anunciada en la industria correspondiente. Una tiene que ver con la aparente incapacidad o rapacidad de los responsables públicos y privados del sector para organizarlo conforme a normas de productividad social y económica. Perturba comparar los objetivos de los decretos del 15 de diciembre de 1970 con el resumen del Programa Integral de Desarrollo de la Industria Azucarera entregado a la prensa el viernes. En diez años hemos vuelto a lo mismo, es decir, estamos en una situación peor, pues se le agrega el ingrediente del tiempo transcurrido. En ese lapso, además, hemos caminado para atrás en el comercio exterior azucarero: de importantes exportadores que éramos, hemos pasado a ser compradores de dulce en el exterior, para satisfacer una demanda que sobre todo por las adquisiciones industriales crece más rápidamente que la población. Si no se procede también a reorientar este género de demanda, veremos más adelante que la irracionalidad del mercado causa víctimas entre sus propios componentes, pues son las industrias que tienen el azúcar como uno de sus insumos las que cuentan principalmente entre las causas exógenas de la ruina de la producción azucarera.

La otra consecuencia perturbadora concierne a la represión. Un Estado populista, cuando llega a los límites de la dádiva con que controla a la sociedad, y debe fijar precios reales a los artículos subsidiados de consumo popular, tiene que enfrentarse a la protesta social. Los argumentos que atañen a la eficiencia, si no van acompañados de pruebas irrefutables de honestidad y pericia, no pueden ser atendidos ni comprendidos por la población. Ese es, tal vez, el caso de la industria azucarera. Por consiguiente, y aunque el aumento de precios en el azúcar es sólo un ingrediente más en el diario torneo en que se trata de saber qué cosa sube más o escasea más, es causa inexorable de inquietud popular, que a veces se convierte en movilización popular.

La rigidez tozuda de la dirección nacional del sindicato de maestros es señal ominosa de que, invocando el riesgo de la desestabilización, se convoque a las fuerzas más reaccionarias para establecer el orden, orden que ha sido roto por la estructura de la economía y no por quienes protestan contra los efectos de ese fenómeno. Por fortuna, el secretario de Gobernación y, sobre todo, el secretario de la Defensa Nacional, no se han hecho cómplices de quienes ven moros con tranchetes y al declarar que no advierten signos de ruptura social cierran el camino a quienes quieren que la consecuencia de la carestía sea la represión. La república espera que sus palabras correspondan a sus acciones futuras.